

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 157.

En cumplimiento de lo que determina el artículo 1.º del Reglamento para la ejecución de la ley de 8 de enero de 1845, se procedió por este Gobierno á rectificar la estadística del vecindario para los efectos que marca el artículo 2.º de dicho Reglamento.

Para esta operación se tuvieron presentes los datos que obran en esta Oficina y en la Comisión superior de Estadística; mas como aun así, algun Ayuntamiento pueda ilustrar sobre la exactitud en el número de vecinos con que figura, he acordado insertar á continuación la nota estadística que se formó, á fin de que los Ayuntamientos que consideren conveniente hacer observaciones que preparen alguna rectificación procedente, se sirvan comunicarla á este Gobierno en todo el mes de la fecha, acompañándolas con los datos en que se funden. Orense abril 7 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

PARTIDOS. AYUNTAMIENTOS. Número de vecinos.

Allariz	1,964
Baños de Molgas	896
Esgos	715
Junquera de Ambia	748
Junquera de Espad.	578
Maceda	1,076
Paderna	885
Tahoadela	582
Villar de Barrio	605
Bande	1,590
Entrín	770
Lovera	617
Loxos	1,115
Muñíos	1,075
Padrenda	1,024
Verea	861

Beariz	554
Boborás	1,514
Carballino	1,995
Cea	1,487
Maside	2,269
Piñor	797
Salamonde	787
Leije	1,405

Archedo	459
Bola	999
Cartelle	1,558
Celanova	1,189
Cortegada	952
Freás de Eiras	681
Gomesende	926
Merca	1,101
Puentedera	409
Quintela de Leirado	606
Villameá	716
Villanueva de los Infantes	712

Baltar	609
Blancos	529
Calvos de Randín	660
Ginzo de Limia	997
Moreiras	371
Porquera	619
Rairiz de Veiga	952
Sandianes	501
Sarreans	750
Trasmiras	651
Villar de Santos	549

Amoeiro	991
Barbadanes	364
Canedo	941
Coles	1,111
Nogueira de Ramuín	1,620
Orense	1,905
Pereiro de Aguiar	1,510
Peroja	1,216
San Ciprian de Viñas	815
Toén	898
Villamarín	871

Castro Caldelas	1,034
Chandreja	454
Laroco	359
Manzaneda	796
Montederramo	710
Parada del Sil	709
Puebla de Trives	946
Rio	692
Teijeira	424

Abion	1,204
Arnoya	642
Beade	752
Castro de Miño	880
Cenlle	853
Leiro	1,184
Melon	916
Ribadavia	1,425

Barca de Valdeorras	1,184
Carballada	878
Petín	541
Rua	475
Rubiana	794
Vega	1,558
Villamartin	921

Castro del Valle	708
Cualedro	892
Laza	900
Monterrey	996
Oimbra	528
Riós	1,068
Verín	1,102
Villardeiós	1,118

Bollo	1,102
Gudiña	540
Mezquita	617
Viana del Bollo	1,721
Villarino de Conso	477

Número 158.

El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con fecha 15 del mes próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.

Por el Ministerio de Estado se ha comunicado á este de la Gobernación con fecha 12 de enero último la Real orden siguiente.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro Plenipotenciario de Portugal ha dirigido una nota en 4 del corriente á esta primera Secretaría de Estado, para participar que el Gobierno de S. M. F. ha resuelto que se emprendan varios trabajos geodésicos en las fronteras de Portugal, á fin de que sirvan de base para la formación de una Carta corográfica de este Reino. Como es indispensable para ello construir varias pirámides de diversas alturas de nuestro territorio, el Gobierno de Portugal desea que el de España expida las órdenes correspondientes á todas sus Autoridades civiles y militares en las provincias fronterizas, para que dejen entrar libremente en ellas á cualquier Oficial que justifique hallarse encargado, ya de la construcción de estas pirámides, ya de las observaciones á que hubieren de proceder después de levantadas.—Lo que de orden de S. M. comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, traslado á V. S. con el objeto de que adopte desde luego las disposiciones convenientes, para que no se ponga impedimento por parte de los pueblos y Autoridades de España á los trabajos que se indican en la preinserta Real disposición.

Lo que he dispuesto insertar en el Bo-

letín oficial para conocimiento del público, y para que los Alcaldes y mas delegados del Gobierno cuiden de que no se ponga el menor entorpecimiento á los que conste ó acrediten estar encargados del servicio de que se hace mérito. Orense abril 7 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 159.

El Ilmo. Sr. Director general de Correos me dice en 27 de marzo último lo siguiente.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:—Ilmo. Sr.—He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en esa Dirección general con motivo de la práctica introducida en perjuicio del buen servicio del ramo, admitiendo para su envío y circulación por el correo un cúmulo considerable de paquetes de impresos, papel sellado y otros efectos extraños á la correspondencia, que diariamente se remiten á las Administraciones por diferentes centros directivos, corporaciones y funcionarios; y penetrada S. M. de las razones expuestas por la misma Dirección acerca de la imposibilidad de que dichos efectos se remitan por el correo sin menoscabo de este preferente servicio, tanto por el considerable incremento que de día en día va adquiriendo la correspondencia pública, para cuya conducción son insuficientes los almacenes de las actuales sillas, como por el entorpecimiento y retraso que un aumento de peso tan excesivo ocasiona en las expediciones, dificultando el cumplimiento de los itinerarios, se ha servido dictar las siguientes disposiciones:

1.º Que en lo sucesivo no se admitan en las Administraciones del ramo para su remisión ó circulación por el correo, cajas ni bultos que contengan efectos extraños á la correspondencia pública y los periódicos, aun cuando procedan de las oficinas del Estado.

2.º Que cuando el servicio público lo exija imperiosamente, y á falta de todo otro medio de transporte, se admitan los bultos ó paquetes que con documentos, impresos &c. entreguen en las dependencias de correos las demas del Estado, con tal de que las dimensiones de dichos bultos y paquetes no excedan de una tercera en cuadro de ancho y una cuarta de alto, en conformidad á lo establecido por la instrucción de 1.º de diciembre de 1843.

5.º Que los libros e impresos que con igual objeto entreguen los particulares, solo podrán ser admitidos y conducidos por el correo, cuando lo permitan el peso y volumen de la correspondencia y periódicos, en la forma y términos prevenidos por el art. 12 del Real decreto de 24 de octubre de 1849 y orden de la Dirección general de Correos de 5 de abril de 1856.

Y por último, 4.º Que cuide V. I. muy particularmente de que en las sillascorreas no se admitan encargos ni equipajes, cuyo peso y volumen excedan de los límites marcados en las cláusulas del contrato de arrendamiento de asientos de los expresados carruajes.

Lo que traslado á V. S. para los efectos correspondientes.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para conocimiento del público. Orense 4 de abril 858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 170.

En la Gaceta número 76 del miércoles 17 de marzo se lee lo siguiente:

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO REAL.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que ante mi Consejo Real pende por vía de recurso, en primera y única instancia, entre partes, de la una Doña Ana Gomez Pastor, viuda del Coronel graduado D. Gabriel Escolar, recurrente, y representada por el Licenciado D. Ignacio Lallave, y de la otra parte mi Fiscal, en representación y defensa de la Administración general del Estado, de mandada sobre que, contra lo determinado en la Real orden de 2 de setiembre de 1857, se rehabilite á la interesada en el goce de la pensión de 4 rs. diarios que se le concedió por Real orden de 8 de julio de 1836:

Visto:

Vista la expresada Real orden, que literalmente dice: «Conformándose S. M. la Reina Gobernadora con el parecer del Consejo de Ministros, se ha servido conceder la pensión de 4 rs. diarios sobre el Real Tesoro á Doña Ana Gomez Pastor, viuda del Coronel graduado D. Gabriel Escolar, Capitán que fué de Caballería, en consideración á las circunstancias particulares que la privaron del derecho al Monte-pío».

Vista la Real orden de 2 de Setiembre por la cual se declaró caducada la pensión de Doña Ana Gomez Pastor, habiéndose fundado esta disposición en las consideraciones siguientes:

Primera. Que la concesión de la pensión debatida es anterior al decreto en Cortes de 11 de mayo de 1837, y debe venir por tanto sujeta á sus prescripciones.

Segunda. Que concedida en atención á las circunstancias particulares que privaron de viudedad á la interesada, debe reputarse de carácter gracioso.

Tercera. Que no se halla comprendida en ninguna de las categorías del citado decreto de Cortes, ni ha sido tampoco confirmada por una ley especial.

Visto el escrito de demanda, presentado por el Licenciado Lallave á nombre de Doña Ana Gomez Pastor en 4 de noviembre de 1857, pidiendo que se la declare con derecho á continuar en el goce de la pensión y á percibir las mensualidades atrasadas:

Vistas las tres certificaciones acompa- ñadas por la recurrente á su último escrito, libradas por dos Coroneles y por un Teniente Coronel graduado, manifestando, en suma, que por causas independientes de la voluntad de D. Gabriel Escolar y de su esposa Doña Ana Gomez Pastor no se había realizado este matrimonio antes de que el marido cumpliera la edad de 60 años:

Visto el escrito de contestación de mi Fiscal, pidiendo que se desestime el recurso de la interesada:

Vista la disposición 23 de las generales que acompañan el presupuesto de Clases pasivas del año de 1855:

Vista la ley sobre clasificación de pensiones de 12 de mayo de 1837:

Considerando que la pensión concedida á Doña Ana Gomez Pastor, según se deduce de los términos de la Real orden, fue una compensación de los derechos de Monte-pío que debió adquirir por su matrimonio con el Coronel graduado Don Gabriel Escolar, y que no adquirió porque este matrimonio se verificó después de haber cumplido el susodicho la edad de reglamento, por causas de fuerza mayor, independientes de la voluntad de ambos cónyuges, á pesar de haber practicado las gestiones necesarias en tiempo oportuno:

Considerando que en este concepto la dicha pensión debe estimarse remuneratoria de los servicios del marido, ya que no pudo gozar la viuda las consecuencias de los desembolsos hechos para el Monte-pío, cuyos beneficios por el rigor de los principios del mismo reglamento, no la alcanzaron:

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Domingo Ruiz de la Vega, Presidente; D. Manuel García Gallardo, D. Saturnino Calderon Collantes, D. Florencio Rodriguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. José Velluti, D. Manuel de Sierra y Moya, D. José Ruiz de Apudaca, D. Francisco Tames Illeza, D. Antonio Navarro de las Casas, D. José María Trillo, D. José Antonio Olañeta, D. Antonio Escudero, D. Diego Lopez Ballesteros, D. Fernando Alvarez, D. Fermín Salcedo y D. José Caveda.

Vengo en dejar sin efecto mi Real orden de 2 de setiembre del año pasado, y en declarar subsistente la pensión concedida á Doña Ana Gomez Pastor por la otra Real orden de 8 de julio de 1836, mandando se le continúe satisfaciendo con las mesadas vencidas desde que se suspendió el pago.

Dado en Palacio á diez y siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho. —Esta rubricado de la Real mano. El Ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mi Secretario general del Consejo Real, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Ugie, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 25 de febrero de 1858.—Juan Sunyé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 2 de abril de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 171.

En la Gaceta número 83 del miércoles 21 del actual se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de marzo de 1858, en los autos pendientes ante Nos en virtud de apelación interpuesta por D. Severiano Fernandez, de la providencia dictada por la Sala primera de la

Real Audiencia de Valladolid, denegatoria de la admisión del recurso de casación:

Resultando que por ejecutoria de 28 de octubre de 1856, la Sala segunda de la misma Audiencia condenó á D. Severiano Fernandez, como dueño de una casa y huerto que compró en Zamora en 8 de Setiembre de 1853, á pagar á D. Angel Leirado y sus hermanas la cantidad de 6.600 rs. que, como capital metálico, fué adjudicado á su padre; obligación de la cual quedaría relevado si cedía á los Leirado la expresada finca:

Resultando que el Juez de primera instancia de Zamora, á quien se presentó esta ejecutoria para su cumplimiento, mandó requerir á Fernandez al pago de los 6.600 reales, á que cediera la casa y huerto; á lo cual contestó aquel no poder verificar lo primero por no tener dicha suma, ni lo segundo por pesar sobre sus bienes obligaciones preferentes:

Resultando que, acordado el procedimiento de apremio contra dicha finca, fué tasada en 11.160 rs., por los cuales se sacó á subasta, y no se presentó postor:

Resultando que interpuesta demanda de tercera por los hijos del deudor, como acreedores preferentes por sus legítimas maternas, solicitando Leirado y sus hermanas que, sin perjuicio de esta demanda y mediante á no haberse presentado postor se les adjudicará aquella finca en las dos terceras partes de su tasación; solicitud á que se opuso Fernandez por el perjuicio que se iba á seguir á sus hijos:

Resultando que la Sala primera de dicha Real Audiencia, restando el auto del inferior, dictó sentencia en 14 de octubre último, mandando que D. Severiano Fernandez otorgue á favor de los hermanos Leirado la correspondiente escritura de venta de la casa que desde luego les adjudicaba, poniéndoles en posesión de ella, quedando sin embargo los Leirado obligados á responder con la misma del resultado del incidente de tercera;

Y resultando, por último, que interpuesto recurso de casación de esta sentencia por el expresado Fernandez, fundado en la infracción del artículo 997 de la ley de Enjuiciamiento civil, fué denegado, y en su consecuencia apeló de esta negativa para ante este Supremo Tribunal:

Vistos, siendo Ponente el Ministro Don Manuel Ortiz de Zúñiga:

Considerando que, para que sea admisible el recurso de casación, es necesario, con arreglo á los artículos 1.010 y 1.011 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se interponga de sentencia que recaiga sobre definitiva, entendiéndose por tal la que, aunque haya recaído sobre un artículo, ponga término al juicio y haga imposible su continuación:

Considerando que si bien la sentencia contra la cual se interpuso el recurso de casación, al mandar adjudicar á los hermanos Leirado la finca de que se trata, impuso á estos la expresada obligación de responder con la misma del resultado de la tercera de preferencia deducida á nombre de los hijos de D. Severiano Fernandez;

Y considerando que esta adjudicación, con la obligación expresada, no pone término al juicio de tercera ni hace imposible su continuación; dejando por el contrario expedito el derecho de preferencia que puedan tener los terceros interesados á la misma casa,

Fallamos, que debemos confirmar y confirmamos la providencia apelada, entendiéndose no haber habido lugar á la admisión del recurso de casación, y condenamos en las costas á los recurrentes, en cumplimiento del art. 1.085 de la misma ley; devolviéndose los autos en la forma establecida en el art. 1.067.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid dentro de los cinco días siguientes á su fecha, y de los cinco días siguientes á su fecha, se insertará en la Colección legislativa, con arreglo al art. 1.037, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—El Marqués de Girona.—Sebastián Gonzalez

Nandin.—Jorge Gisbert.—Miguel Osca.—Manuel Ortiz de Zúñiga.—Antero de Echarrri.—Fernando Calderon Collantes. Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. é Ilmo. Señor Don Manuel Ortiz de Zúñiga, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico.

Madrid 18 de marzo de 1858.—Juan de Dios Rubio.

En la villa y corte de Madrid, á 20 de marzo de 1858, en el pleito que sigue Doña Agustina Abril sobre tercera á ciertos bienes embargados á su hijo Don José Quieruga, á instancia de Doña Carmen Velasco; pleito pendiente ante Nos por recurso de nulidad, que interpuso Doña Agustina Abril, de la providencia de la Sala primera de la Audiencia de Granada, en que le fué denegada la súplica de la sentencia pronunciada por la misma Sala en 2 de marzo de 1857:

Resultando que promovido juicio ejecutivo en el Juzgado de primera instancia de Santa Fé, por Doña Carmen Velasco contra Quieruga sobre pago de 17.120 rs., se despachó ejecución, comprendiéndose en el embargo verificado en 1855, entre otros bienes de Quieruga, el fruto de 45 marjales y el de otras tierras con sus mejoras que aquel llevaba en arrendamiento, y los alquileres de dos casas, sitas en Granada, cuya propiedad era del ejecutado y de su hermana, y de su madre Doña Agustina Abril, el fruto vitalicio:

Resultando que esta dedujo oportunamente demanda de tercera, alegando haberle traspasado su hijo, en 1846, la labor que llevaba de varias tierras con sus mejoras, constituyendo parte de las primeras, 55 marjales pertenecientes á Don Juan José Marqués:

Resultando que la misma Abril presentó una escritura en la que aparece haber recibido, en arrendamiento del referido Marqués, 55 marjales y 17 estadales de tierra por término de dos años, que habían de empezar en 15 de agosto de 1852, pudiendo fácilmente prorogarse el arrendamiento por un año mas y debiendo ser la renta anual media fanega de trigo y 5 reales por cada marjal:

Resultando de dos certificaciones dadas en agosto y noviembre de 1855 por el Secretario de Gavia la Grande y visadas por el Alcalde, documentos presentados por la Velasco, que en el amilaramiento de la riqueza de aquella villa, que sirvió de base para el repartimiento de la contribución territorial en aquel año, no resultaba inscrita la Abril, y que en el que había igualmente servido de base para la derrama de contribución del indicado año tampoco aparecía aquella ni como propietaria ni como arrendataria de finca alguna:

Resultando de otra certificación del referido Secretario, extendida en enero de 1856, que desde 1851 hasta 1855 inclusive la contribución que antes pagaba la Abril venia abonándola su hijo político Don José María Romero; en cuyo poder estaban las fincas y labores de aquella, según manifestación de la misma en el memorial que con tal objeto dirigió al Alcalde:

Resultando que hecha publicación de probanzas, pidió en su alegato Doña Carmen Velasco que continuase el juicio ejecutivo contra todos los bienes embargados menos respecto á las dos casas hipotecadas:

Resultando que, sustanciada la tercera, declaró el Juez de primera instancia que había lugar á ella únicamente en cuanto á los 55 marjales y 17 estadales; providencia de la cual apeló Doña Agustina Abril, adhiriéndose á la apelación la parte contraria:

Resultando que, seguida la segunda instancia, recayó sentencia de vista, en la que

se declaró la tercera en cuanto al usufructo que durante su vida correspondía a la Abril de las dos casas, y se mandó siguiese la ejecución respecto a los demás bienes embargados, condenándose a aquella en las costas de la instancia, y confirmando el auto, apelado en lo que fuese conforme con la providencia y revocándose en lo que no lo fuera.

Resultando que suplicada por Doña Agustina la anterior sentencia, se declaró en 4 de abril del año anterior improcedente la suplica: providencia contra la cual interpuso la indicada parte el presente recurso de nulidad fundándolo en la infracción del art. 67 del reglamento provisional para la administración de justicia, en razón a que los frutos de los 55 marjales y 17 estadales, en los años 55, 56, y 57 valían más de 4.000 rs., cantidad que, unida al valor de las mejoras, al importe de las costas en que había sido condenada y a la renta de las dos casas que usufructuaba, excedía en mucho de los 5.000 rs. suma que exigía la ley para la procedencia de la tercera instancia.

Wistes, siendo Ponente el Ministro Don Sebastián González Nandín.

Considerando que Doña Agustina Abril, respecto a los tres años a que se refiere, únicamente ha presentado el recibo de la renta de las tierras concerniente al de 1855, apareciendo de las certificaciones, legalmente expedidas por el Secretario de Gavia la Grande, que en el año de 1855, época en que fueron embargados los frutos pendientes de los 55 marjales y 17 estadales, de los que se supone arrendataria Doña Agustina Abril, no aparece esta en los respectivos libros de amillaramientos de dicha villa, ni como contribuyente, ni como propietaria, ni como arrendataria de finca alguna.

Considerando, por tanto, que su alegación, referente a que se computen las rentas vencidas de las indicadas tierras en los años 1856 y 1857 con objeto de aumentar el valor de la cantidad litigiosa y respecto a los cuales no ha presentado documento alguno, carece de fundamento en que apoyarse.

Considerando que las demás razones de la recurrente, con el mismo objeto aducidas, son igualmente inatendibles, porque la condena de costas, que es solo una indemnización concedida en juicio a la buena fe, a expensas de la temeridad, en ningún caso puede alegarla el condenado como aumento del valor de lo que litiga; porque las mejoras que invoca no han sido objeto de prueba en los autos, y porque, en fin, los arrendamientos vencidos de las dos casas, que reclama también como computables, los excluyó expresamente del juicio ejecutivo la ejecutante Doña Carmen Velasco.

Considerando, por último, que limitados a un año los frutos de los 55 marjales y 17 estadales, únicos en que pudo legalmente admitirse la tercera, esos frutos, graduado su valor con arreglo a la prueba consignada en autos, no llegan a la cantidad de 5.000 rs., que es la que exige el artículo 67 del reglamento provisional para la admisión de la tercera instancia, y que no ha sido, por tanto, infringido dicho artículo por la providencia de la Sala primera de la Audiencia de Granada al denegar la suplica que ha dado motivo al presente recurso de nulidad.

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar a él; condenando, como condenamos en su consecuencia a Doña Agustina Abril en las costas del mismo y a la pérdida de los 10.000 rs. en que tiene dada caución, los que en caso de satisfacerlos por llegar a mejor fortuna, se distribuirán con arreglo a derecho.

Y por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las correspondientes copias certificadas, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Sebastián González Nandín.—Jorge Gishert.—Miguel Ossa.—Felipe de Urbina.—Eduardo

Elio.—Antero de Echarrí.—Fernando Calderón Collantes.

Publicación.—Laida y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Sebastián González Nandín, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma sala en el día de hoy, de que yo el escribano de Cámara certifico.

Madrid 20 de marzo de 1858.—Juan de Dios Rubio.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 9 de abril de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 172.

En la Gaceta número 87 del domingo 28 del actual se les lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.

Ilmo. Sr.: Acerciendo S. M. la Reina (Q. D. G.) a una solicitud de D. Juan Garsí, se ha dignado autorizarle por el término de ocho meses para verificar los estudios de un ferro-carril que, partiendo de Tarragona y pasando por Vallís, vaya a empalmar con el de Montblanch a Reus; entendiéndose que por esta autorización no se le confiere derecho alguno a la concesión del camino, o indemnización de ningún género, ni se restringe la facultad del Gobierno de dar iguales autorizaciones a los que pretendan el estudio de la misma línea, y de someter a las Cortes la concesión con arreglo al proyecto más ventajoso, o negarla, si juzgare que el establecimiento de ferro-carril ha de lastimar intereses o derechos creados en virtud de otras concesiones, o ser perjudicial bajo el punto de vista del interés general del país.

De Real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 20 de marzo de 1858.—Guendulain.—Señor Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido a bien autorizar a Don Mateo Obregon para que, sin perjuicio de los derechos de propiedad de cualquiera otro interesado, aproveche las aguas del río Pas como fuerza motriz de un molino harinero que ha construido en el término de Bejorís, provincia de Santaner, debiendo verificar las obras de la presa con sujeción a las condiciones siguientes:

Primera. Mantendrá constantemente en buen estado las líneas de defensa marcadas en el plano 1aa y 2a.

Segunda. Las líneas 1aa y 2a se defenderán con una estacada que revista, como en la actualidad, un dique de cantos rodados. Las demás defensas se harán de cantos rodados y plantaciones.

Tercera. La presa no tendrá mas altura que un metro sobre el cauce actual del río, y estará formada de estacas de mampostería o sillería.

Cuarta. El interesado deberá construir las obras con arreglo al proyecto aprobado y bajo la inspección del Ingeniero de la provincia.

De Real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1858.—Guendulain.—Señor Director general de Obras públicas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, y a fin de fijar las condiciones de tramitación necesarias en expedientes que por su naturaleza puedan producir la separación del servicio de algún funcionario del cuerpo de Telégrafos, Vengo en mandar que el art. 107 del reglamento orgánico del mismo quede redactado en los términos siguientes:

Art. 107. Ningun empleado en el cuerpo de Telégrafos podrá ser privado de su destino, ni de las ventajas señaladas a los de su clase por los reglamentos y disposiciones especiales relativas a esta carrera, sin que previamente se halle probada en expediente gubernativo terminado en el Ministerio de la Gobernación o en la Dirección general de Telégrafos, según de donde proceda el nombramiento, y después de oír al interesado y hacer constar con toda extensión sus exculpaciones, la causa determinada que le haga merecedor del castigo que se le impone.

Los que sean separados de dicho cuerpo en esta forma no podrán ingresar de nuevo en el servicio del mismo.

Dado en Palacio a veinticuatro de marzo de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Subsecretaria.—Sección de Administración.—Negociado 5.º

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Gerona lo que sigue:

En vista de la instancia elevada a este Ministerio en 9 de octubre de 1856 por el Ayuntamiento de Blanes, en solicitud de que no tenga lugar el ingreso en caja de los suplentes de los mozos que residen en Ultramar, hasta tanto que conste que estos últimos han sido exceptuados del servicio, o en caso de que a ello no se acceda, que dichos mozos sean excluidos del alistamiento de su respectivo pueblo; y teniendo en consideración:

1.º Que no se halla derogada la Real orden de 26 de marzo de 1855, que dispone que los referidos suplentes de los mozos a quienes toque la suerte de soldados hallándose en las posesiones españolas de Ultramar ingresen desde luego en el ejército, sin perjuicio de que sean dados de baja cuando se justifique que los mozos cuyas plazas sirven han cubierto la que les tocó en suerte, ya sea personalmente, ya por medio de la redención;

Y 2.º Que sería establecer un privilegio en favor de los mozos que residen en Ultramar y en perjuicio de los que se hallan en la Península al acceder a que aquellos no sean comprendidos en el alistamiento para las quintas.

La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el dictamen de las Secciones de Guerra y de Ultramar del Consejo Real, se ha dignado desestimar en todas sus partes la mencionada petición del Ayuntamiento de Blanes.

De Real orden, comunicada por el referido señor Ministro, lo traslado a V. S. para los efectos correspondientes y a fin de que se tenga presente la preinscripción de que se tenga presente la preinscripción en los casos análogos que pudiesen ofrecerse en lo sucesivo. Dios guardan ofrezcan en lo sucesivo. Madrid 26 de marzo de 1858.—El Subsecretario, Juan de la Cruz Osés.—Sr. Gobernador de la provincia de....

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 8 de abril de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Anunciada ya la exposición agrícola é industrial para fines del próximo julio en Santiago, accedo gustoso a una excitación que hace la Junta directiva del concurso. Con ilustrada previsión de que a los objetos espuestos, si pertenecen a la agricultura, acompañen indicaciones acerca de la clase de terreno en que se hayan recogido, método seguido en su cultivo, época de siembra y recolección y producto aproximado que de ellos pueda obtenerse. Debiendo estas noticias constituir un informe que dicha Junta se propone entregar al dominio público, se comprende, y recomiendo eficazmente la mayor exactitud en su redacción, para que en su día puedan servir de fundamento a seguros cálculos. Orense 7 de abril de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CONSEJO PROVINCIAL DE ORENSE.

Los individuos que componen el mismo en union del Comisario de guerra de esta provincia.

Certifican: Que según los datos que tienen a la vista de los precios a que se han vendido durante el mes de marzo actual los artículos que a continuación se expresan, resultan por término medio el de un real seis céntimos ración de pan; cuarenta y nueve reales once céntimos fanega de trigo; treinta rs. un céntimo la de centeno; veinte y ocho reales cuarenta y siete céntimos la de cebada; treinta reales catorce céntimos la de maíz; un real noventa y siete céntimos la arroba de paja; tres reales sesenta y siete céntimos la de yerba; diez y ocho céntimos onza de aceite; un real siete céntimos arroba de leña; y tres rs. cincuenta y ocho cént. la de carbon; todo de peso y medida de Castilla. Y para los efectos que dispone el artículo 4.º de la Real orden de 16 de setiembre de 1818 el 3.º de la de 4 de abril de 1850, dan este testimonio en Orense a 27 de marzo de 1858.—E. P., José Primo de Rivera.—E. C., Manuel Ferreiro Cid.—E. C., Vicente Seara.—El Secret.º, José Benito Siso y Ruiz.—El Comisario de Guerra.—Miguel Ruiz.

ESPECIES.	REALES.
Ración de pan.	1'06
Fanega de trigo.	49'11
Idem de centeno.	30'01
Idem de cebada.	28'17
Idem de maíz.	30'11
Arroba de paja.	1'97
Idem de yerba.	3'67
Onza de aceite.	0'18
Arroba de leña.	1'07
Idem de carbon.	3'58

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

No habiendo tenido efecto la subasta de arriendo de fincas de los partidos que se espresarán, por frutos del presente año, procedentes del Clero secular y regular, Hermandades y Cofradías y adjudicaciones por débitos a la Hacienda, se anuncia la segunda licitación con rebaja de una sexta parte del tipo, bajo los presupuestos y el pliego de condiciones que a continuación se inserta.

La subasta se celebrará el día 25 del actual a las once de su mañana en el despacho del Sr. Gobernador civil de la provincia, ante su autoridad, el Administrador de propiedades y derechos del Estado y escribano del Juzgado de Hacienda; é igualmente se verificará en dicho día y hora en las casas consistoriales de los pueblos que constituyen cabeza de partido, ante el Alcalde constitucional,

Procurador síndico y fe de escribano, y en la Corte en el Gobierno civil de aquella provincia, quedando pendiente de aprobación de la Dirección general de propiedades y derechos del Estado.

El remate se empezará por el orden que se figura en este anuncio, y se admitirán posturas a todas las licitaciones que se presenten en la duración de media hora por cada partido, que tendrá este acto.

	Número de fincas.	Su tipo.	Rs. vn.
Partido de la capital...	255	6,012	50
de Allariz....	295	8,800	
de Ribadavia...	55	1,665	
de Carballino...	139	5,754	17
de Baude....	151	5,571	67
de Celanova...	182	5,550	
de Verín....	299	4,620	31
de Villamartin...	545	5,050	54
de Trives....	150	1,900	51

Modelo de proposición.

Don.... vecino de.... se comprometo a llevar en arrendamiento las fincas que figuran en el presupuesto, formado por la Administración principal de propiedades y derechos del Estado, correspondientes al partido de.... por la suma de.... rs., conformándose en un todo con el pliego de condiciones formulado para este objeto; en virtud del cual ha entregado en la Caja de Depósitos de la Tesorería de esta provincia la fianza de.... que previene la Instrucción, según lo acredita el recibo adjunto.

Fecha y firma.

Pliego de condiciones para la subasta de arrendamiento de fincas del Clero secular y regular, Santuarios y Hermandades y adjudicaciones por débitos a la Hacienda, por frutos del presente año, con sujeción a lo prescrito en la Real Instrucción de 16 de junio de 1853 y órdenes posteriores.

1. El remate se celebrará el día y hora que se cita en esta capital, y se verificará también simultáneamente en las cabezas de los partidos judiciales, y en la Corte, ante los funcionarios que se designan en el anuncio, quedando pendiente de aprobación de la Dirección general del ramo.
2. Se admiten posturas por partidos judiciales totalizados, y las generales que quieran presentar los interesados, para lo cual se hallan clasificados convenientemente los presupuestos que rigen para la subasta; pero no serán admisibles las que no cubran la cantidad que marcan los anuncios por arriendo anual, debiendo acompañar al pliego de proposición el recibo de la Caja de Depósitos del importe del 10 por 100 en concepto de fianza.
3. El arriendo se entiende por frutos del corriente año, que principiará a contarse en 1.º de enero y concluirá en fin de diciembre.
4. Si las fincas tienen labores hechas y frutos pendientes el día de la adjudicación del arrendamiento, pagará el rematante a prorrata y en metálico, el valor que a juicio de peritos se gradúe a aquellos.
5. El rematante queda obligado, al fenece el contrato, a dejar las fincas en el buen estado en que se le entregan, quedando sujeto a satisfacer los daños y perjuicios o deterioros que a juicio de peritos se notasen.
6. Las fincas que tengan arbolado o viñedos, serán cultivadas con el mayor esmero, haciendo las labores de costumbre según el uso del país, y con la absoluta prohibición de cortar el arbolado, ni menoscabar, a no ser la rama o poda, bajo la responsabilidad consignada en la condición anterior.
7. El arrendatario satisfará por semestres vencidos el importe del arriendo

- si es de 20,000 rs. inclusive en adelante, por trimestres también vencidos si excede de 500 rs. no llegando a 20,000 y anualmente a su vencimiento, cuando no pase de 500 rs., pero alzando en este caso a satisfacción del Administrador principal.
8. Si las fincas después de arrendadas, se enagenasen, estará obligado el comprador a respetar el año de arriendo.
9. No se admitirán posturas a ninguno que sea deudor al Estado.
10. Los arrendatarios no tendrán derecho a pedir perdon o rebaja, ni solicitar pagar en otros plazos ni en distinta especie que lo estipulado; el contrato ha de ser a suerte y ventura, sin opción a ser indemnizados por extinción de langosta, pedrisco u otro incidente imprevisto.
11. Si no cumplieren la obligación de pago en los términos contratados, quedarán sujetos a la acción que contra ellos intente la Administración principal y a satisfacer los daños y perjuicios a que dieren lugar. Si llegase el caso de ejecución para la cobranza, se entenderá rescindiendo el contrato en el mismo hecho, y se procederá a nuevo arriendo en quiebra.
12. Satisfarán de su cuenta y riesgo en la Administración principal de propiedades y derechos del Estado y en monedas corrientes de oro o plata el importe del arriendo en los plazos marcados.
13. No sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos a los escribanos, fieles de fechos y pregoneros; siendo igualmente de su cuenta el papel que se invierte en el expediente y escritura, y las dietas de los peritos en el caso de justiprecio.
14. No obstante haber eliminado de los respectivos presupuestos las fincas enagenadas y pagadas por los compradores, cualquiera alteración que a lo sucesivo pueda ofrecer este trabajo, sería objeto de una rectificación por parte de esta oficina, con referencia a los inventarios y demás antecedentes que existen en la misma.
15. Quedan exceptuadas las casas rectorales, huertas y otras tierras anejas a las mismas, y en el caso de que se hubiere comprendido alguna, se considerará como baja para el arrendatario, previo el expediente de instrucción.
16. Los arrendatarios no podrán utilizarse de las fincas que no consten en los inventarios, y que por consecuencia han dejado de figurar en los presupuestos; pero le serán imputadas las que además de las incluidas en ellos, resulten deber arrendarse, bien sea por descubrimiento u otro concepto. Debiendo ser consideradas como ocultas las que todavía se detentan al Estado, pertenecen única y exclusivamente al dominio de la investigación; quedando sujetos a las penas de instrucción, los arrendatarios o colonos que clandestinamente se aprovechen de otras fincas que aquellas de que con referencia a los inventarios facilitará desde luego individual relación esta Administración principal.
17. Quedarán también sujetos los arrendatarios a las demás condiciones que particularmente se hallen establecidas por las leyes, y adoptadas por la costumbre en la provincia, siempre que no se opongan a las contenidas en este pliego; y gan a las contenidas en este pliego, y siendo una de ellas la de satisfacer a los arrendatarios salientes los gastos ocasionados en el cultivo de las tierras de pan lleo, en el cultivo de las tierras de cuenta de varó de otro fruto, queda de cuenta de los entrantes el abono de los legítimos gastos que hayan tenido en dicho cultivo, entendiéndose que estos gastos no sufran exoneración para que las fincas no sufran menguado alguno, mediante a que es de su obligación el laboreo de las citadas tierras, que deberá satisfacerseles asimismo por los siguientes arrendatarios que han de sucederle.

Orense 8 de abril de 1858.—El Administrador principal, José de Torres Nuer.

Juzgado de primera instancia de Caldas.

Don José M. Nieto, juez de primera instancia de este partido.—Por el presente se cita y emplaza en forma a los herederos de D. Ambrosio Lopez, cuya par rero que ha sido de S. Salvador de Siec poros, para que como acreedores designados por Juan Compañ, de la misma ciudad, se apersonen en este Juzgado, y Escribanía del infrascrito, a deducir de su derecho en el incidente de pobreza que para defenderse en la demanda de tercera, por desfalco de bienes dotales interpuesta por su mujer, Josefa Tancira contra el mismo, y acreedores, ha promovido la propia Tancira, advertidos que si no lo hiciesen en el término legal y según lo prevenido por la legislación antigua, porque se rige el asunto, le parará el perjuicio que haya lugar. Dado en Caldas a 15 de marzo de 1858.—José M. Nieto.—Por su mandado, Andres del Villar.

Idem de Arzúa.

Don Ramon Rodriguez Valeiras, juez de primera instancia de la villa de Arzúa y su partido, &c.—Por el presente: cito, llamo y emplazo a José Pérez vecino de Sta. Maria de Castrofeito, en este partido, para que dentro del término de treinta días se presente en este juzgado a responder a los cargos que contra el resultan en la causa que instruyo sobre extinción de varios efectos de la casa del mismo; con apercibimiento que de no verificarlo se sustanciará aquella en su rebeldía y le parará el perjuicio que haya lugar. Exorto a la vez a los señores Jueces de primera instancia, Alcaldes constitucionales y demás dependientes de la administración de justicia, que siendo habido, se sirvan acordar su detención y remesa a este juzgado, a cuyo efecto se expresan sus señas a esta continuación. Dado en la villa de Arzúa a 22 de marzo de 1858.—Ramon Rodriguez Valeiras.—Por su mandado, José Sanchez Rapela.

Señas del José Pérez.

Estatura 5 pies y 2 pulgadas, edad como de años 28, pelo negro, barba lampiña, nariz regular, ojos rojos, color bueno, vestia sombrero redondo de paño negro, chaleco de burel blanco, calzon de idem negro, medias de lana blanca y calzaba zapatos unas veces y otras zuecos.

Don Ramon Rodriguez Valeiras, juez de primera instancia en la villa de Arzúa y su partido, &c.—Por el presente: cito, llamo y emplazo a José Souto (a) Carraço, vecino de la parroquia de Santa Maria de Brañas, contra quien y otros en dicho juzgado se instruye causa criminal de oficio, por complicidad en el hurto de caballerías a D. Roque Caton, José García del distrito de Sobrado y otros varios, para que se presente en la cárcel pública de este partido, en el término de nueve días a responder a los cargos que le resultan en dicha causa; si así lo hiciera, se le oirá y hará justicia, bajo apercibimiento de que no presentándose en dicho término, se dará a la causa su tramitación practicándose por su rebeldía en los estrados, todas las notificaciones y diligencias, para lo cual le parará el perjuicio. A la vez parandole a las autoridades así civiles como militares, el que por todos los medios que se encuentren a su alcance procuren la captura del sobredicho y curen la captura del sobredicho y su remesa a mi disposición, sus señas físicas y esta imitación: sus señas físicas. Dado en la villa de Arzúa a 27 de marzo de 1858.—Ramon Rodriguez Valeiras.—Por su mandado, José Sanchez Rapela.

Señas.

Estatura menos de 5 pies, pelo rojo, ojos idem, nariz regular, barba poblada, cara redonda pequeña, y en ella y en el cuello algunas manchas blancas, vistiendo pantalón gris chiqueta paño fino, chaleco

de estilo de marina negro y otro por encima idem (o) vueltas encarnadas, sombrero de paja en la cabeza y zapatos.

Idem de Hacienda de Lugo.

Por el juzgado de Hacienda de Lugo, se cita, llama y emplaza al que dijo llamarse Benito Cid Fernandez, de San Juan de Villamartin Ayuntamiento de Breiros, para que en el término de quince días, se presente ante el mismo a responder a los cargos que contra el resultan en la causa que se le sigue por delito de contrabando; bajo apercibimiento que de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lugar. Dado en Lugo a 26 de marzo de 1858.—José Maria Elloa.—Por mandado de S. S., Francisco Abuin y Torres.

Idem 3.º de paz de Leiro.

Don Miguel Lopez, 3.º Juez de paz de Leiro.—Hago notorio que en la audiencia de dicho 3.º juzgado de paz, se celebró juicio verbal a instancia de D. Javier Loureiro, de Gomariz, contra Juan de Cabo, de Dacor, por 32 rs.; en el que resultó la sentencia que sigue: En la Alcaldía de Leiro a 1.º día del mes de marzo año de 1858; D. Miguel Lopez, 3.º juez de paz de la misma, habiendo oído en juicio verbal a D. Javier Loureiro de Gomariz, que reclamó en juicio verbal de Juan de Cabo, de Dacor, distrito de Maside, 32 rs. que se obligará a satisfacerle Antonio, de Cabo, difunto padre del demandado, resto de vino prestado; Resultando que Antonio de Cabo, padre del demandado, escribiera al demandante, para que entregase un poco de vino a dicho demandado en el año de 51; y que de este haber recibido seis ollas al precio de 11 rs., una ha otorgado el correspondiente resguardo; Resultando que en el año de 51, el referido padre del demandado al hacer cuentas con el D. Javier, quedó obligado a dar a este dentro de un mes 32 rs. por resto de dicho vino que llevara su ante dicho hijo, lo que se halla probado por dos testigos conformes presentados por el demandante; Resultando que los tratos referidos se asevera fueron en Gomariz de este distrito de Leiro, en donde es vecino el D. Javier, y a quien ofrecia el Antonio venir a hacerle la cuenta; Resultando que el demandado hallándose accidentalmente en este dicho distrito, fue citado por cédula que por no querer firmar su recibo, lo hicieron dos testigos llamados al efecto, en cumplimiento del art. 22 de la ley civil: Por todas estas razones debo de providenciar y providencio; habida consideración a lo que dispone la tercera parte del art. 5.º de la misma ley y en rebeldía del demandado, conforme al 1.173 de la expuesta ley, que dicho Juan de Cabo satisfaga dentro de 3.º día los 32 rs. con las costas, puesto que el mismo fue quien alzó del D. Javier el vino de que proceden, al paso que es responsable de las deudas acauzadas y aun de las hechas por su referido padre en mancomunidad de pago, se hallan los referidos demandados y su padre; y por esta su sentencia juzgando en primera instancia, así lo dispuso, mandando al mismo tiempo que dicha sentencia se notifique en los estrados del mismo juzgado de paz, y se publique por edictos en la puerta del mismo y en los Boletines oficiales de esta provincia, como lo disponen los artículos 1.183 y 1.190 de la ley mencionada, para que de esta manera le cause al Juan de Cabo el perjuicio que marca el 1.193, si en los seis meses que le dispensa no se presenta a decir y justificar lo que se dispone en el 1.191, y la firma dicho señor juez, de que yo el secretario interino certifico.—Miguel Lopez.—José Maria Témes, secretario interino. Y en cumplimiento al dicho artículo 1.190, libro el presente hoy 12 de marzo de 1858.—Miguel Lopez.—José Maria Témes, secretario interino.